



PROGRESSIVE
ALLIANCE **ALLIANCE**
PROGRESSISTE

ALIANZA
PROGRESISTA

www.progressive-alliance.info

9 de octubre de 2017

[Declaración a la prensa](#)

Acabar con las matanzas, dejar de silenciar las protestas

Esta es la declaración de una delegación compuesta por siete miembros de la Alianza Progresista (AP) y del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) que ha visitado Manila esta semana para evaluar la situación y mostrar su solidaridad en apoyo a la democracia en Filipinas.

*La delegación estaba formada por: **Konstantin Woinoff** (Coordinador, Alianza Progresista), **Giacomo Filibeck** (Vicesecretario General, Partido de los Socialistas Europeos), **Emilia Töyrä** (Miembro del Parlamento, Suecia), **Thomas O. Melia** (Vicesecretario Adjunto de Estado para la Democracia y los Derechos Humanos de la Administración de Barack Obama), **Arne Lietz** (Miembro del Parlamento Europeo, Grupo de los Socialistas y los Demócratas, SPD), **Conny Reuter** (Secretario General, SOLIDAR) y **Ben Maxfield** (Partido Laborista Australiano). La delegación se reunió con los líderes políticos de varios partidos y organizaciones civiles y visitó las comunidades en Caloocan y Navotas.*

Nosotros, los siete miembros de la misión de derechos humanos de la Alianza Progresista (AP) y del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), estamos extremadamente alarmados por el creciente número de muertes provocadas por la campaña contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte.

Las matanzas de personas acusadas de estar implicadas en el comercio de drogas, sin pruebas y sin ser sometidas a juicio, continúan sin cesar incluso en los últimos días. A pesar de ello, el gobierno filipino sigue negándolo ante la comunidad internacional.



La campaña del gobierno ha quedado ensombrecida por graves violaciones de los derechos humanos que tememos que estén siendo alentadas por el propio presidente en sus discursos públicos. Las matanzas se han cebado con los más vulnerables: los jóvenes y los pobres.

Nos preocupan igualmente los agresivos esfuerzos que despliega el gobierno para silenciar a aquellos que expresan su desacuerdo con las matanzas ilegales. Condenamos rotundamente el creciente número de casos de persecución política contra las personas críticas con la infame campaña del presidente Duterte.

Las absurdas acusaciones contra la senadora Risa Hontiveros, del Partido Akbayan, muy crítica con las mortales medidas antidrogas de Duterte, son el más reciente ejemplo de las acciones sistemáticas del gobierno para silenciar a los opositores en este país.

Estas acusaciones falseadas se han producido tras otros ataques similares a mujeres críticas con el gobierno: desde el injusto encarcelamiento de la senadora Leila De Lima, experta jurídica altamente respetada y exsecretaria de justicia, basado en acusaciones absurdas, hasta las distintas amenazas a las mujeres al frente del Tribunal Supremo y de la Oficina de Defensa del Ciudadano.

La Iglesia Católica es también objeto de la persecución, ya que apoya a la gente, especialmente a los pobres, que son las víctimas principales de las matanzas desenfrenadas.

Si el gobierno de Filipinas quiere mantener su compromiso con la democracia, debe poner fin a los acosos contra la pacífica oposición política por motivos políticos.

La responsabilidad recae directamente sobre el presidente Duterte. Si Duterte mantiene su campaña sangrienta contra las drogas y su agresiva persecución política, será el responsable de la creación de tensiones en las relaciones comerciales con la comunidad internacional, especialmente teniendo en cuenta la próxima revisión del Sistema de Preferencias Generalizado (SPG+), un instrumento especial de comercio que permite la entrada en la UE de 6200



productos filipinos sin aranceles. Si no se respetan las normas de los derechos humanos, habrá consecuencias que afectarán a la inclusión de las Filipinas en este instrumento comercial especial de la UE.

Reiteramos, por consiguiente, nuestro llamamiento para que este gobierno se ponga a trabajar para detener las matanzas de inmediato y para que permita a las Naciones Unidas que investiguen lo ocurrido sin impedimentos. El gobierno debe asegurarse de que los policías responsables del uso de la fuerza excesiva en las operaciones denominadas “one-time big-time” (únicas y de alto nivel) rindan cuentas y debe abordar el problema de la droga respetando los derechos humanos y desde una perspectiva de salud.

También hacemos un llamamiento al gobierno para que ponga fin a sus hostiles intentos por silenciar a todo aquel que intente oponerse a la guerra del gobierno contra las drogas. ¡No debe silenciarse nunca la voz de la gente!

Nosotros, en la Alianza Progresista y el Partido de los Socialistas Europeos, nos comprometemos a vigilar la situación de cerca. La comunidad internacional se une para defender la democracia y los derechos humanos.